



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE: JOAQUIN EMILIO HERNANDEZ OSORIO.
DEMANDADO: JAIME ALBERTO ESCOBAR URREA.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: CONFIRMA.

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados, Nancy Gutiérrez Salazar y Carlos Alberto Lebrún Morales, teniendo en cuenta que la Dra. María Eugenia Gómez Velásquez se encuentra en permiso, procede a revisar el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor del demandante, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor **JOAQUIN EMILIO HERNANDEZ OSORIO**, sucedido procesalmente por sus hijos JOAQUÍN EMILIO HERNÁNDEZ BETANCUR y ELSY ALEJANDRA HERNÁNDEZ CASTRILLON, en contra de **JAIME ALBERTO ESCOBAR URREA**.

Sin ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Condenar al demandado al pago de la Pensión Sanción Indexada.

HECHOS:

- Que laboró al servicio del demandado en el cargo de Oficios Varios, en la finca “Buenos Aires”, vereda “La Cristalina” de Puerto Berrio, del 15 de enero de 1990 al

15 de junio de 2004, cuando el empleador le terminó unilateralmente el contrato; devengando el salario el mínimo legal mensual vigente para el año 2004.

- Que el 14 de julio de 2004 se celebró entre el demandante y el señor Daniel Escobar Builes, en calidad de agente oficioso, Audiencia de Conciliación, en la que estos acordaron el pago de \$14.355.582, por concepto de cesantías, intereses a estas, subsidio familiar e indemnización.
- Y que no se le ha cancelado la Pensión Sanción a la que tiene derecho, al haber laborado 14 años y 5 meses, sin haber sido afiliado en Pensiones obligatorias.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Absolvió al demandado de los cargos formulados en su contra por el demandante. Declaró probada la Excepción de inexistencia de la obligación; y se abstuvo de imponer condena en Costas Procesales a la parte actora.

Dijo el A quo que el actor no aportó prueba de la prestación personal del servicio en favor del demandado, y de la aportada no es posible concluir que entre las partes existió una relación laboral en los extremos temporales referidos en la demanda, la cual resultaba imprescindible para que pudiera tener éxito el reconocimiento de la pensión sanción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Competencia:** Consulta. Artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S. “Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario, serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas”.
- **Objeto:** Determinar si conforme al acervo probatorio obrante en el Proceso, es procedente o no el reconocimiento y pago de la Pensión sanción solicitada en la demanda y a cargo del demandado. Veamos:

PENSIÓN SANCIÓN.

El artículo 133 de la Ley 100 de 1993, vigente para el momento de la supuesta terminación de la relación laboral referida por el actor en el hecho primero de la demanda, establece para la procedencia de tal prestación, que:

“El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido (...)”.

Frente a la finalidad u objeto de la referida Pensión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en SL018 del 19 de enero de 2022, Radicación N° 80481, M.P: Gerardo Botero Zuluaga, sostuvo:

“... resulta claro que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, tiene como objetivo el reconocimiento de una pensión destinada a cubrir el riesgo de vejez de aquellos **trabajadores que fueron despedido sin justa causa después de 10 años de servicios y que no tienen la posibilidad de que tal contingencia sea asumida por el sistema de seguridad social en pensiones debido a su no afiliación por omisión del empleador...**”.

Así las cosas, teniendo en cuenta el supuesto normativo y jurisprudencial anteriormente referido, la Pensión Sanción surge sólo si: 1) el trabajador labora un tiempo mínimo de 10 años con el mismo empleador, 2) no es afiliado al Sistema General de Pensiones, y 3) es despedido sin justa causa.

Y en cuanto a la existencia del CONTRATO DE TRABAJO, se tiene que la ley sustantiva laboral define el contrato de trabajo, consagra los elementos esenciales del mismo y asegura una presunción a favor del trabajador en los arts. 22, 23 y 24 del C.S.T; presumiéndose que toda prestación personal de servicio está regida por un contrato laboral. Ello significa que quien alega un contrato de trabajo debe probar la prestación personal del servicio, para que entre a regir en su favor dicha presunción. Presunción que es de carácter legal, o sea que admite prueba en contrario, lo cual faculta al supuesto empleador para contraprobarla y de tal manera entrar a desvirtuarla.

Sobre lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia Laboral 2879 del 24 de julio de 2019, Radicación N° 62373, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, reiterando el criterio expuesto en Sentencia del 24 de abril de 2012, Radicado 39600, sostuvo:

“... que probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume...

Si el demandado acepta la prestación del servicio, pero excepciona que lo fue mediante un contrato civil, como sucedió en el sub lite, le allana el camino al demandante para ubicarse en el supuesto de hecho contenido en el artículo 24 del CST y **ampararse en la presunción de que se trató de un contrato laboral**. En cuyo evento, el demandado tiene a su cargo desvirtuar la presunción mediante pruebas que demuestren, con certeza, el hecho contrario del elemento de la subordinación, **es decir que la prestación personal del servicio se dio de manera independiente...**”

Ahora, el otro elemento propio del contrato de Trabajo es el de la **subordinación jurídica**, consistente en la posibilidad que tiene el patrono de dar órdenes e instrucciones al trabajador en cualquier momento, y en la obligación correlativa de éste de acatar su cumplimiento.

Descendiendo al caso de autos, se tiene que a folios 7 y 8 del archivo digital 01 -primera instancia-, obra copia del Acta de Conciliación celebrada el 14 de julio de 2004, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre el demandante y el señor Daniel Escobar Builes -tercero ajeno al presente Proceso-, en la que se lee que estos conciliaron lo concerniente con una reclamación de carácter laboral del actor en la “Finca Buenos Aires”, del 15 de enero de 1990 al 15 de junio de 2004, acordándose el pago de \$14.355.582, previo descuento de la suma de \$3.500.000, para un total de \$10.856.000, por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, subsidio familiar e indemnizaciones.

Ahora, si bien el demandado en el interrogatorio de parte que absolvió en el proceso, admitió que había sido propietario de la “Finca Buenos Aires”, que el referido señor Escobar Builes -con quien el actor realizó la Conciliación-, es su hijo; y en tal acta se lee que éste actuó en calidad de agente oficioso, lo cierto es que en esta no se dijo en nombre de quien se ejercía la supuesta Agencia Oficiosa. Así lo dijo en el interrogatorio de parte:

“P/ ¿Conoce al demandante? R/ no sé el nombre de él, allá lo conocíamos como Juan sin camisa, ni siquiera sabía que se llamaba Joaquín.

P/ ¿Conoce a Daniel Escobar Builes? R/ si claro, es hijo mío.

P/ ¿Quien se desempeñaba como trabajador y que oficio desempeñaba Juan sin camisa? R/ cuando yo la compré era una finca de recreo... yo no tenía nada allá, había un ganado que tenía esa finca, 5 o 6 vacas y era a interés, eso lo manejaban ellos y me pagaban algo por el arriendo, porque quedé de propietario, por eso me pagaban a mí por el pasto que había allá... yo no tenía trabajador allá...

P/ ¿Tiene conocimiento de una Audiencia de conciliación celebrada entre el demandante y Daniel Escobar Builes? R/ hombre realmente no me acuerdo, yo no digo que sí ocurrió o no, yo no me acuerdo, pero yo allá no tenía ningún negocio, no recuerdo eso...

P/ En razón de que Daniel fue a esa Audiencia como agente oficioso? R/ como le digo no recuerdo, a mí se me borró eso, no recuerdo eso, no le digo sí o no, no me acuerdo.”

De las anteriores pruebas, si bien se puede deducir que el actor prestaba servicios en la finca “Buenos Aires” de propiedad del aquí demandado, pues así lo admitió éste último en el interrogatorio de parte que absolvió en el Proceso, lo que no quedó lo suficientemente claro fue que ese servicio lo prestaba en favor del citado ya que éste afirmó que el actor sí manejaba un ganado en la finca, pero en arriendo, lo cual no permite la aplicación de la Presunción prevista en el Art. 24 del C.S. del T. ; y el Acta de Conciliación anexa al Proceso fue celebrada no con el demandado sino con un hijo suyo que aunque dijo actuar como Agente oficioso, no dijo de quién.

Por tales razones y al no estar demostrada la existencia de la relación laboral entre las partes, la Sala no encuentra acreditado ninguno de los requisitos necesarios para la procedencia de la Pensión Sanción deprecada por el demandante, el cual tenía dicha carga probatoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del C.G.P. -aplicable por analogía al Proceso laboral, Art. 145 CPT y de la S.S.-. **CONFIRMA Absolución.**

Sin Costas Procesales de Segunda Instancia, las cuales no se causaron al conocerse del proceso en virtud del Grado Jurisdiccional de Consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

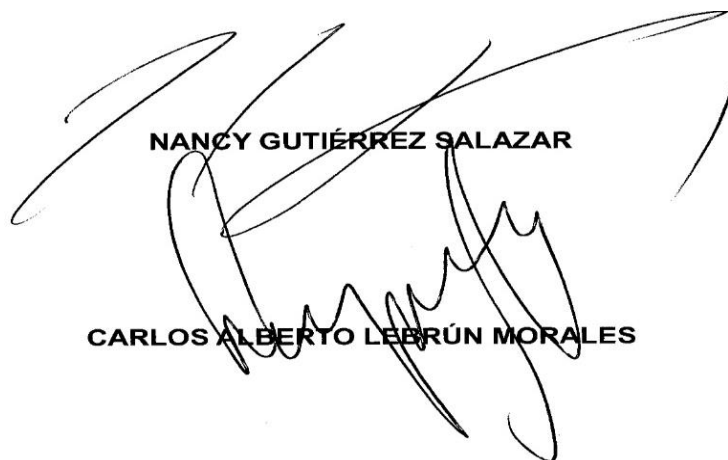
DECIDE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín** el 2 de septiembre de 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **JOAQUIN EMILIO HERNANDEZ OSORIO**, sucedido procesalmente por sus hijos JOAQUÍN EMILIO HERNÁNDEZ BETANCUR y ELSY ALEJANDRA HERNÁNDEZ CASTRILLON, en contra de **JAIME ALBERTO ESCOBAR URREA**, según las consideraciones de esta Sentencia.

SEGUNDO: Sin Costas Procesales de Segunda Instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO** y se firma en constancia.

Los Magistrados,



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES